

Rasgos esenciales del modelo de funcionamiento económico en Cuba. Limitaciones y retos de las transformaciones en marcha

OSCAR FERNÁNDEZ*

Resumen

El presente trabajo intenta profundizar en la categoría de «modelo de funcionamiento económico», identificando seis de sus ejes articuladores esenciales, entre ellos: el peso relativo de cada tipo de propiedad, las diferentes alternativas para gestionar la propiedad social, la forma que adopta la organización económica del Estado, la estructura y características de los mercados agregados, el tipo de mecanismo que predomina en la regulación de la producción, así como el peso relativo de las distintas fuentes de distribución de la riqueza. El examen, a través de estos ejes, de las principales transformaciones en marcha en la economía cubana, así como el análisis de algunas de sus limitaciones y retos, constituye el principal objetivo del estudio.

PALABRAS CLAVE: actualización, Cuba, modelo económico, planificación, reforma, socialismo.

Abstract

The present paper is aimed at deepening the category of "model of economic functioning", identifying six of its main articulating pivotal points: the relative weight of each kind of property, the different alternatives to manage social property, the way State economic organization assumes, the structure and features of aggregated markets, the predominant types of mechanisms over production regulations, as well as the relative weight of different sources of goods' distribution. The assessment through such pivotal points of main ongoing transformations of Cuban economy, as well as the analysis of some of its limitations and challenges constitutes the main goal of the present study.

KEYWORDS: updating, Cuba, economic model, planning, reform, socialism.

* Doctor en Ciencias Económicas. Departamento de Planificación, Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Contacto: oscar@fec.uh.cu.

La economía se ha convertido en el tema central de discusión en la Cuba de 2011. Durante los últimos meses hemos asistido a un amplio debate acerca de la necesidad de «actualizar» nuestro modelo económico, haciéndolo más funcional a las exigencias vigentes para un desarrollo, según la alternativa socialista. Sin embargo, en este debate es notable la ausencia de un esclarecimiento teórico de partida, lo que ha conducido a colocar en un mismo nivel de análisis elementos con importancias relativas muy disímiles, mezclando aspectos determinantes, incluso, del sistema socioeconómico, con elementos específicos a dilucidar en el campo de los desequilibrios coyunturales.

El primer paso en el esclarecimiento de la discusión acerca del «modelo» para una economía es la especificación de su papel como componente de la política económica. Las acciones o medidas que la conforman suelen referirse a tres planos fundamentales: los aspectos coyunturales, los estructurales y los funcionales. Este último plano es el que comprende el modo de organizar y relacionar todos los actores económicos y que pueden sintetizarse a través de la categoría «modelo de funcionamiento económico». Aunque en la literatura especializada el término «modelo económico» es objeto de una multiplicidad de usos, la noción a la que se hace referencia representa una construcción teórica que permite caracterizar los rasgos o principios más generales del funcionamiento de la economía en su conjunto, enmarcados en un determinado sistema socioeconómico.

Para caracterizar estos principios, en un momento dado, es factible analizar cómo están configuradas, al menos, seis de las principales variables interdependientes con potencialidades para marcar matices claves en la determinación de cada modelo; estas variables son:

1. Peso de las diferentes formas de propiedad
2. Formas de gestión de la propiedad social
3. Organización económica del estado
4. Características y estructura de los mercados agregados
5. Mecanismos predominantes de regulación de la producción
6. Peso de las diferentes fuentes de distribución de la riqueza

La construcción de un determinado modelo de funcionamiento económico requiere la elección de ciertos postulados o principios teóricos para cada una de estas variables, de manera que sugiera la forma más conveniente que deben adoptar en función del contexto y del tipo de mecanismo que se pretende construir. Las relaciones sociales de reproducción que se impulsen fijarán los límites para cada uno de estos

ejes de funcionamiento, lo cual otorga especial relevancia a la reflexión sobre cada principio adoptado. Pretender hacer transformaciones en el modelo cubano sin el riguroso esclarecimiento de los límites sistémicos puede destapar un proceso de transición irreversible que comprometa la construcción socialista.

Siguiendo la lógica conceptual que aporta la delimitación de cada uno de los ejes definidos anteriormente, a continuación se intenta mostrar un análisis más profundo de los rasgos del modelo cubano actual, de sus principales limitaciones, así como sus retos más significativos.

El modelo económico socialista cubano, desde la primera mitad de la década de 1960, evolucionó hacia un estrechamiento de la heterogeneidad socioeconómica con la supresión abrupta de la presencia de capital privado en la economía, así como de la pequeña producción mercantil. La ampliación cuantitativa del sector estatal se extendió a lo largo de tres décadas y llegó a su punto culminante en 1989, cuando empleaba cerca del 95 % del total de trabajadores de la nación. Por su parte, uno de los principios por los que apuesta el nuevo modelo es, sin duda, una mayor participación en la economía de las formas menos sociales de propiedad. Es preciso recordar que ya desde la década de 1990, como resultado de las transformaciones del periodo, el sector privado nacional se ha ido incrementando, incluso, más allá de lo que puede capturar el Sistema Nacional de Estadísticas. Apuntemos, por ejemplo, que en el año 2009 más de un millón de personas en edad laboral no se encontraban empleadas (ni con el Estado, ni como cuentapropistas, cooperativistas, o agricultores), no estaban buscando empleo y tampoco formaban parte de los matriculados en la educación superior.¹ Teniendo en cuenta que hasta ese momento el mercado laboral por cuenta propia presentaba fuertes barreras institucionales y que la contratación de fuerza de trabajo por privados nacionales estaba proscrita, existen razones para suponer que una parte no despreciable de ese millón de personas estuviera empleada en el sector privado en condiciones no observables, ya sea como trabajadores individuales, asalariados o pequeños propietarios. Por lo tanto, el principal mérito de la reformulación de la propiedad en el nuevo modelo radica en el esfuerzo por atemperar las regulaciones vigentes a las condiciones objetivas de la reproducción. La expansión que experimenta el empleo privado constituye un adecuado diagnóstico de las circunstancias reales de las fuerzas productivas, en este momento, del tránsito de Cuba al socialismo.

¹ Aun sin descontar la gran cantidad de estudiantes universitarios que a la misma vez trabajan y, por tanto, forman parte de la población empleada.

Por otra parte, el ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba, luego de su expansión en los años noventa, estuvo legalmente restringido a la modalidad de propiedad privada individual (sin contratación de fuerza de trabajo). Sin embargo, la tendencia natural desde esta forma mercantil simple es a desarrollarse a partir del incremento de la contratación sistemática de fuerza de trabajo, y de la expropiación de una parte del valor producido por ella. La reciente autorización para contratar trabajadores privados permite el reconocimiento oficial implícito de la existencia de parcelas de propiedad privada capitalista –al menos a escala de la microempresa– y constituye una de las transformaciones conceptuales más trascendentes en los últimos cincuenta años. Esta nueva realidad, que a mi entender presenta inconsistencias con la Carta Magna, demanda altas dosis de cautela en su implementación, así como una profunda dilucidación teórica.²

Ante la inminente proliferación de agentes económicos cuya función de optimización no es otra que maximizar los beneficios, en torno a los cuales se genera un complejo entramado de relaciones predominantemente mercantiles que se reproducen de manera exponencial, se impone un rediseño del Estado como actor regulador y garante de los objetivos sistémicos de la reproducción. El asunto de la necesaria regulación sobre la acumulación potencial de riquezas en manos de determinados sectores debe afrontarse no solo empleando los instrumentos del sistema tributario, sino a través de la promoción de determinados consumos –servicios de ocio, bienes duraderos, etcétera– que permitan extraer y redistribuir parte de lo acumulado, así como tratar de que no representen, en sí mismos, concentración de medios de producción.

También parecería lógico que el objetivo de evitar la concentración de capital, resultante natural de la expansión del sector privado, se intentase conducir a través de fórmulas cooperativas utilizando incentivos fiscales y de otro tipo. Sin embargo, esta idea de promover formas de propiedad colectiva en actividades no agrícolas, por ser inédita para los cubanos, parece requerir un tiempo mayor de maduración hasta definir sus derroteros de aplicación.

Finalmente, como consecuencia de una mayor presencia de formas no estatales y dadas las condiciones de partida, se puede esperar, por un lado, un desenvolvimiento económico en condiciones de mayor

² La Constitución cubana en su Artículo 14 establece que «En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre». Cfr. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, 2003.

eficiencia en varios sectores; mientras que, por otro, se puede producir un avance relativo de una clase social de naturaleza intrínsecamente antisistémica, con el cual se incrementarían las relaciones de intercambio mercantil marcadas por el interés material. Esto tiende a impactar negativamente sobre las relaciones socialistas de reproducción, incluso aunque no las comprometa en lo inmediato.

La apuesta por un papel más protagónico del sector privado, que busca dinamizar a corto plazo el desempeño económico, entraña profundos riesgos de restauración capitalista en un horizonte temporal mediano. Sin embargo, la persistencia de un modelo con una centralización hiperbolizada que ignora las condiciones objetivas de la reproducción, también entraña un considerable riesgo de reversión sistémica, quizás más peligroso por resultar menos evidente.

La mayor participación del sector privado o cooperativo desarrollado en el punto anterior puede impregnar aires superiores de eficiencia en el desempeño de la economía. Sin embargo, el éxito económico del sistema socialista no descansa sino en el aprovechamiento efectivo de las potencialidades que posee el llamado «sector estatal», abrumadoramente determinante en el desempeño económico nacional. Entonces, ¿qué hacer con las empresas «estatales» para que estas consigan un desempeño eficaz? Es posible, naturalmente, elegir entre varios modelos alternativos para gestionar el conjunto de decisiones que conducen a la optimización del encargo social de cada empresa.

El primero de estos modelos de gestión empresarial, principal herencia del diseño soviético, se puede denominar «gestión estatal centralizada». Es sencillo suponer que, bajo esta forma, la mayoría de las facultades deben ser sometidas a la consideración o decisión de los niveles correspondientes de la estructura gubernamental que rodea la empresa. Como consecuencia habitual de esta manera de manejar el sistema productivo –dada la elevada complejidad que encierra la optimización de una cantidad tan grande de decisiones– se generan brechas entre la demanda y la oferta a nivel microeconómico, en ocasiones, artificiales. También bajo este modo de gestión, las empresas y sus trabajadores tienden a desentenderse de sus resultados económicos, con lo cual se pierde el efecto de los sistemas de pago por resultado, así como la pretensión de elevar los niveles de productividad adquiere un carácter voluntarista. Otro rasgo derivado lo constituyen los escasos niveles de tercerización resultantes, dados los fuertes incentivos a la autarquía que genera el modelo centralizado. El diseño verticalista de toma de decisiones, así como el sobreempleo de intervenciones administrativas, conduce a las empresas a la filosofía

de que la única manera de garantizar una producción en el tiempo y calidad requeridos es generando la capacidad de hacerlo todo por sí mismas.

El modelo alternativo más evidente, el de «gestión estatal descentralizada», debe evitar algunas de estas deformaciones, pues se supone que un mayor número de las decisiones sean adoptadas por el equipo directivo de la empresa, aunque se mantengan otras en el nivel central, entre ellas el nombramiento de la propia dirección. El debate histórico y la oscilación de la práctica en Cuba han girado básicamente en torno a estos dos modelos. En el contexto de los cambios actuales, nuevamente se apuesta con claridad por la promoción de formas empresariales más descentralizadas.

Ahora bien, el paso a un mecanismo de funcionamiento estatal descentralizado debe atender la siguiente advertencia: no se puede transferir autoridad a las empresas sin diseñar a mediano plazo las formas que no son de participación, sino las de control efectivo de los trabajadores sobre las decisiones de estas. No se pueden transferir las facultades empresariales a los empresarios, sino a la sabiduría y a los intereses del poder colectivo, de lo contrario se enfrentarían dos riesgos superlativos:

- a. continuar postergando la necesidad de avanzar en la realización de la propiedad social, y mantener el distanciamiento del trabajador respecto a los intereses, incluso, a nivel de colectivo laboral; y
- b. potenciar aún más una clase de empresarios pseudosocialistas, con poderes decisorios semiabsolutos, y que en las experiencias descentralizadoras de los modelos exsocialistas de Europa del Este constituyó el caldo de cultivo en la catálisis de la restauración capitalista.

Por otro lado, bajo las circunstancias del debate en marcha, también se exploran en Cuba nuevas alternativas para gestionar la propiedad social, en este caso a través del traspaso temporal a la gestión privada. Esta receta puede resultar factible fundamentalmente para aquellas actividades que, aun perteneciendo a empresas estatales, se encuentren más próximas –por su escala o tipo de actividad– a los patrones de la producción mercantil simple. En entidades de mayor escala se pudieran ensayar, con personas naturales nacionales, fórmulas similares a los contratos de administración aplicados a extranjeros en empresas del turismo.

Existen, por su parte, otras alternativas de gestión de la propiedad social no tan debatidas aún en el contexto cubano actual. Por ejemplo, si la descentralización de autoridad sobre las decisiones de la empresa –incluyendo la selección de los máximos directivos– recayera sobre el colectivo de trabajadores, estaríamos en presencia de una forma de «gestión colectiva». Esta forma es indudablemente superior a la gestión privada, pues garantiza colocar el esfuerzo individual al menos en el camino de la realización de los intereses de un colectivo.

La forma superior de gestión de la propiedad social, virtualmente ausente como propuesta orgánica en el nuevo modelo, es la necesidad de establecer mecanismos sistemáticos y efectivos de control y conducción a nivel social sobre el desempeño de las empresas, así como sobre todas las decisiones en su conjunto. En esta alternativa, que denomino forma de «gestión social», el patrimonio productivo es gestionado por el Estado, pero se requiere otra manera de concebirlo, lo cual evidentemente trasciende el universo estrecho de las relaciones económicas.

Ensayar, por ejemplo, fórmulas de control de las actividades empresariales a través de los Órganos del Poder Popular en sus diferentes niveles, pudiera ser un camino a explorar. Si las más de tres mil entidades existentes en Cuba al cierre de 2010, en lugar de formar parte de las estructuras organizativas de alrededor de una treintena de ministerios y organismos centrales, se organizaran en grupos empresariales de subordinación nacional, provincial y municipal, cuya gestión fuera controlada por las Asambleas del Poder Popular de los respectivos niveles, se estaría dando un paso serio en la construcción de formas superiores de gestionar socialmente los medios de producción que pertenecen a la sociedad en su conjunto. De esta manera, además, se podrían aislar de una vez las llamadas funciones estatales –que intransferiblemente deben desempeñar los ministerios– de las denominadas funciones empresariales, que podrían ser ejecutadas por los equipos de dirección de las entidades y supervisadas por los máximos órganos representativos del poder del Estado a los diferentes niveles. Claro está que esto demanda un rediseño del sistema del Poder Popular a todos sus niveles, adoptando conceptos que, sin abandonar los principios de la moral socialista, posibiliten una mayor profesionalización de los diputados y delegados e incrementen su protagonismo real. Deben revisarse asuntos como la necesidad de que los parlamentarios puedan dedicarse a tiempo completo a esta actividad y no solamente en horario extralaboral, las atribuciones y funciones que en la práctica ejercen las asambleas respecto a la administración, y el propio proceso electoral,

comenzando por los mecanismos de nominación y representatividad de la sociedad.

Se deben institucionalizar las vías para la participación sistemática y protagónica de los ciudadanos en los procesos de la nación, no solamente en forma de consulta popular para los eventos trascendentales o transformaciones más significativas, como ha ocurrido en múltiples ocasiones en Cuba. La relación dialéctica que encierran los conceptos vanguardia-masa debe superar la implementación que ha tenido hasta el momento. La práctica según la cual el grupo considerado ideológicamente más avanzado se erige con la misión de generar las sucesivas correas de transmisión de una voluntad de cambio organizada, debe ser superada por formas más directas de control sobre los procesos de la nación por parte de un número cada vez mayor de actores sociales.

El avance hacia el socialismo, en tanto sociedad que no emerge espontáneamente, requiere una planificación integral abarcadora que no puede ser ejercida más que desde una dirección centralizada. Sin embargo, el espacio para que se materialice el determinante papel que deben desempeñar la iniciativa, el espíritu emprendedor y la posición de los actores de la actividad económica en todos los niveles, debe ser concebido eficazmente, despojado de instrumentaciones formales o irrealizables.

La demarcación entre las atribuciones centrales y las locales en el ejercicio del poder del Estado, en este caso referido a sus funciones económicas, constituye otro de los elementos distintivos del modelo de funcionamiento de la economía. Este aspecto está relacionado con lo que J. Tinbergen denomina «grado de centralización de la administración». Por lo tanto, la facultad para establecer la recaudación y utilización de los fondos públicos, así como para el ejercicio del control social sobre las empresas nacionalizadas, constituye una de las atribuciones más notorias a delimitar entre los diferentes niveles del Estado.

En la práctica cubana, vigente hasta el momento, los sistemas de gobierno provinciales y locales tienen facultades casi nulas desde el punto de vista de la gestión económica en sus territorios. La impronta aún perenne de la estricta planificación de antaño ejercida centralmente apresa la solución de la problemática local y la hace pender de la prioridad que le atribuya el gobierno central. Las facultades económicas locales, por lo general, se reducen al cumplimiento y control de lo establecido centralmente.

El nuevo modelo a debate pone énfasis en el fomento de iniciativas productivas que impulsen la economía de la localidad, y sugiere cierto

grado de incremento en la autonomía fiscal al establecer el aporte de un tributo territorial por parte de las empresas estatales, las cooperativas y las formas privadas asentadas. Sin embargo, el hecho de que cierto conjunto de decisiones se descentralicen hacia planos locales, manteniendo otras a escala central, no constituye solución si no se crean las vías para que la totalidad de estas decisiones se vean sometidas a fórmulas efectivas de control social.

Otro de los factores que determinan la organización económica del Estado como uno de los ejes del modelo es el relacionado con la «funcionalidad del aparato estatal», que analiza lo apropiado del diseño institucional para el cumplimiento eficaz de sus funciones, dadas las condiciones existentes. Este aspecto está conformado por tres componentes. En primer lugar, se requiere la delimitación entre las funciones del Partido, la Administración Pública y las asambleas del Poder Popular, problema históricamente enunciado por los líderes, pero aún desprovisto de una discusión más profunda que ilumine una solución consistente y estable para la práctica en la Cuba contemporánea. El segundo elemento es la necesidad de rellenar lagunas, desterrar solapamientos y contradicciones, así como garantizar coherencia e integralidad en los encargos funcionales de cada uno de los llamados Organismos de la Administración Central del Estado; por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas y Precios se presenta hoy un conflicto de objetivos entre la función de dictar la política de los precios y la de velar por el déficit presupuestario aprobado. Entre estos dos objetivos prevalece el relacionado con el presupuesto, dado su carácter de ley, que genera en este Ministerio incentivos para manejar el alza de los precios en los mercados formales en busca de incrementar la recaudación, con lo cual termina trasladando a la población el financiamiento de una parte del déficit fiscal.³

Finalmente, se presenta el problema de la separación entre las funciones empresariales y las estatales, cuyas fronteras permanecerán difusas mientras las empresas continúen verticalmente subordinadas a los ministerios ramales. En tanto, el ministro de determinada rama debe velar por el cumplimiento del plan de la economía y responder por los resultados productivos de sus empresas, como reacción natural tenderá a dirigir directamente estas empresas, así como sus diseños de políticas se ceñirán al cumplimiento de este objetivo. En este sentido valórense los siguientes ejemplos: mientras un Ministerio como el de

³ En términos reales esto es equivalente al cobro de servicios públicos como la educación y la salud.

la Pesca –recientemente fusionado en el de la Industria Alimentaria– tenga bajo su cargo el incremento del plan de capturas, enfrentará una permanente contradicción con su función estatal de preservar los recursos pesqueros, el sistema ecológico y la fauna acuática; mientras un Ministerio como el de Turismo responda por el cumplimiento del plan de ingresos de sus cadenas de hoteles, estará ausente una política de turismo integradora que incluya la promoción del sector de arrendatarios por cuenta propia, como oferta complementaria. En cambio, si las entidades productivas y de servicios se constituyeran en organizaciones empresariales superiores e independientes de la subordinación ministerial –como era el caso de la corporación CIMEX hasta 2010–, y si en las estructuras de los ministerios quedaran solamente las unidades presupuestadas que garanticen sus funciones estatales, el esclarecimiento de las fronteras se tornaría más viable.

De cualquier forma, para una mejor funcionalidad del aparato estatal, se impone la necesidad de transparentar los procesos de decisión económica a todos los niveles, sometiénolos a diversas fórmulas de escrutinio público sistemático y real.

En cualquier economía nacional es posible diferenciar claramente varios mercados o espacios donde se intercambian recursos de diversos tipos. Independientemente de cuál sea la forma que adopten estos intercambios –sean más o menos mediatizados por relaciones mercantiles– se pueden identificar tres de los que estudia la Macroeconomía: el mercado de bienes y servicios, el laboral y el monetario-cambiario-financiero. La definición sobre cuáles son los rasgos deseables para cada uno de estos mercados –están comprendidas dentro de ello las características estructurales de la oferta y de la demanda, las conductas predominantes de los actores y los mecanismos para la determinación de los precios y las cantidades– constituye otro de los ejes que conforman el modelo de funcionamiento de la economía nacional.⁴ Su concepción debe asumirse con plena conciencia de la objetiva internacionalización de los procesos económicos mundiales que conecta con mucha fuerza los mercados internos con los externos, incluso más allá de la voluntad de las autoridades nacionales.

El rasgo más significativo del mercado de bienes y servicios en Cuba está evidentemente asociado a las restricciones de la oferta. Esta

⁴ Los oferentes y demandantes están representados, respectivamente, por productores y consumidores en el caso del mercado de bienes y servicios, por trabajadores y empleadores en el caso del laboral, y por instituciones financieras y público en general, para el caso del monetario.

condición anula las posibilidades del control de los adquirientes sobre los productores, con lo cual todo lo que se oferta tiene venta potencialmente garantizada sin importar precio, calidad o surtido. Asistimos de esta manera a un mercado donde los compradores compiten entre sí para adquirir los productos, fenómeno denominado por Woldzimierz Brus (1969) como la «tiranía de los productores».

Aunque la causa determinante en esta situación pareciera hallarse en limitaciones productivas reales, el hecho se agrava cuando la producción de cada renglón se concentra en una o muy pocas empresas, y persigue supuestos beneficios de escala derivados de la especialización. Esta tendencia genera al mismo tiempo una estructura de mercado que garantiza condiciones cuasi-monopólicas a determinados productores estatales.⁵ Este contexto monopólico, aunque encierra un sentido esencialmente diferente al que adquiere bajo condiciones de propiedad capitalista, representa también un poder de mercado virtualmente absoluto que profundiza una relación de fuerza favorable al productor —respecto al consumidor— e influye negativamente sobre la cantidad, la calidad, la variedad y el precio de las producciones.

Para contrarrestar esto, los órganos estatales superiores intentan un diseño que pueda suplantar el inexistente papel en el control horizontal de los consumidores y tienden con ello a un sobredimensionamiento de los mecanismos de control vertical de la economía. Como consecuencia, la autonomía decisoria de las empresas se reduce a la mínima expresión, al ser sustituida por normas o regulaciones altamente detalladas y rígidas. Por lo tanto, una estructura monopólica de la oferta tiende a conducir a una forma de gestión centralizada. A su vez, si el modelo de funcionamiento de la economía elige como principio una gestión estatal centralizada, entonces su propia naturaleza recomendaría elevar los niveles de concentración de la producción, en aras de facilitar el manejo central. En resumen, la concentración de la producción y la gestión centralizada son dos aspectos independientes, aunque muy estrechamente relacionados.

El proceso, en marcha, de ampliación de las facultades de las empresas y reducción del andamiaje regulatorio centralizado no alterará demasiado las condiciones de déficit de oferta; lo que sí permitirá rendimientos extraordinarios en las entidades productivas, si no se modifica la estructura monopólica de los mercados de bienes y servicios. La desconcentración de todas aquellas producciones que no lo desacon-

⁵ A esto debe sumársele la ausencia, hasta el momento, desde el sector no estatal de la economía, de una oferta potencialmente sustitutiva en la mayoría de los rubros.

sejen por cuestiones estratégicas de seguridad nacional sería lo más conveniente.

Otro de los rasgos que posee la oferta en el mercado de bienes y servicios cubano es su carácter altamente segmentado, con una amplia gama de precios diferenciados. El intento de proteger con precios generalmente bajos a determinados sectores de la población, a la larga conduce a la canalización de todos los recursos hacia aquellos segmentos del mercado mejor retribuidos. Cada vez que el Estado asigna recursos y origina una parcela especial de precios, las fuerzas objetivas del mercado generan un proceso de arbitraje que reasigna el recurso a través de mecanismos mercantiles extralegales. Esto propicia fuentes privadas de acumulación que terminan beneficiando a otros sectores distintos de los que se pretendían proteger. Ocurre así porque la demanda, el otro componente del mercado, aglutina en uno solo todos los segmentos generados desde la oferta, y aporta un único precio real que equilibra las cantidades totales ofrecidas con las demandadas.

Al pretender el Estado fijar un precio que se encuentre por debajo del equilibrio del mercado, es natural que algún agente intervenga para apropiarse del diferencial entre el precio oficial y el precio del equilibrio. Esto también ocurre porque las autoridades, subestimando la objetividad de ciertas leyes económicas, suponen controlables las condiciones de distribución de estos recursos. Como consecuencia, las instituciones terminan dedicando cuantiosos esfuerzos materiales y humanos a las tareas de control, naturalmente, sin que consigan resultados eficaces. Una mayor intensidad en los controles solo fortalece la capacidad de detección de violaciones puntuales sin abordar la dimensión causal del fenómeno. La ausencia de un acercamiento a estos temas desde los fundamentos de las ciencias económicas constituye una de las causas más elementales por las que determinadas políticas encaminadas a la protección social no cumplen su cometido.⁶

Otro tanto aporta a esta cuestión el elevado componente de heterogeneidad que caracteriza actualmente la demanda, con restricciones

⁶ A lo largo de los últimos años se han generado innumerables ejemplos en los que el Estado intenta ofertar productos de forma liberada a precios «controlados», mientras el mercado los cotiza en montos muy diferentes. Los precios de los servicios de ponches, los precios de las barberías y peluquerías (antes de su arrendamiento a privados), los parqueos estatales, los servicios de reparación de electrodomésticos, la aparición en la capital del servicio de Coco-Taxi en moneda nacional, la más reciente venta liberada de materiales de construcción, entre otros, son todos ejemplos de subestimación de leyes objetivas del mercado.

presupuestarias muy dispares entre diferentes grupos sociales. Ya no se puede concebir a la «población» como un conglomerado uniforme de consumidores con restricciones presupuestarias semejantes, y desprovistos de preferencias diferenciadoras. La consolidación de estratos con capacidades de consumo muy distantes es un rasgo de la Cuba actual que debe ser adecuadamente contemplado en la conformación de la oferta.

Mención aparte merece el análisis de la inminente emergencia de la oferta no estatal bajo los preceptos del nuevo modelo. Gran parte de la oferta cuyos precios siguen procesados por libre formación, en realidad, ha funcionado durante las últimas dos décadas en condiciones predominantemente oligopólicas. Las causas se pueden hallar, por un lado, en las fuertes barreras a la entrada establecidas por la anterior política económica; por otro, en la regulación al alza que ejercen sobre los productores privados los precios altamente gravados de productos sustitutos y complementarios en las tiendas recaudadoras de divisa (TRD).⁷

Por último, aparece la ausencia total de instituciones en defensa de la competencia en estos mercados, lo cual intenta neutralizar los desdeñables, pero naturales, comportamientos oligopólicos, que tanto laceran el bienestar del consumidor final y que impiden la emergencia de nuevos emprendedores. En los espacios que el modelo de funcionamiento reserve a las relaciones mercantiles deben fomentarse estructuras de mercado competitivas, siempre mucho más justas y socialmente más eficientes. Si las condiciones en la etapa actual del tránsito socialista sugieren el reconocimiento de estos espacios mercantiles, se impone entonces adoptar todas las medidas para garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar sus costos sociales. Aprender a manipular las condiciones del mercado, de forma tal que sea posible la conducción de estas actividades hacia los objetivos de la reproducción sistémica, constituye uno de los principales retos en la actualidad cubana.

El mercado laboral, por su parte, es otro de los componentes imprescindibles en esta ecuación. La demanda de fuerza de trabajo en Cuba, que hasta el momento ha sido estatal en más de un 80 %, ha estado condicionada por la política histórica de pleno empleo que como meta del socialismo ha minimizado –al punto de la extinción– cualquier

⁷ Es posible que una reducción del gravamen a determinados bienes de primera necesidad en TRD tenga un efecto multiplicativo sobre el índice de precios del consumidor «al arrastrar a la baja» los productos sustitutos o complementarios de los mercados de libre formación.

sombra de ejército industrial de reserva. Las fuertes regulaciones que protegen al trabajador ante cualquier intento de cesantía –incluso ante incumplimientos laborales–, sumado a los bajos niveles y las rigideces salariales, conducen a que este mercado también se encuentre bajo el mandato de la oferta.⁸

Otra de las características de la demanda de fuerza de trabajo actual es su rigidez para la contratación parcial. Los efectos de derogar la anterior prohibición de desempeñar más de un puesto de trabajo –a cual era consistente con la forma de concebir el principio del pleno empleo– se ven limitados por el escaso desarrollo de las posibilidades de contratación parcial en el sector empresarial y presupuestado.

La relativa falta de correspondencia entre los niveles de calificación de la oferta de trabajo y las necesidades explícitas de la demanda laboral constituye otro de los desequilibrios de este mercado, el cual deriva en una de las expresiones que adopta el subempleo en Cuba: la baja utilización de las potencialidades de la fuerza de trabajo.⁹ Este fenómeno, unido a los elevados niveles de segmentación que presenta la demanda en el mercado laboral, hace que el sector estatal concorra en condiciones muy desiguales al competir con otros sectores establecidos –legal o extralegalmente– que por determinadas condiciones del marco regulatorio se benefician de la posibilidad de ofrecer remuneraciones varias veces superiores. Por último se menciona un aspecto determinante. A pesar de que Cuba es una isla, dados el desarrollo internacional de las tecnologías comunicacionales y los efectos de la internacionalización de los procesos productivos, el supuesto de economía cerrada resulta totalmente inaplicable. La demanda doméstica de fuerza de trabajo debe competir con la demanda foránea que evidentemente goza de condiciones relativas excepcionales para remunerar, y la oferta cubana resulta altamente competitiva. Los desequilibrios internos en el mercado laboral, por lo tanto, se yerguen como una de las principales causas económicas en el tan sensible tema de la emigración actual.

⁸ Entre las rigideces salariales se encuentran las dificultades para implementar mecanismos efectivos de pago por resultados, pues aún prevalecen las prácticas antisocialistas de establecer un límite máximo a la retribución por el trabajo. Otras, como la determinación centralizada de indicadores prácticamente homogéneos para conformar los salarios a través de unas pocas escalas de aplicación universal, así como la falta de indexación de los salarios nominales a las variaciones en los niveles de precios (incluso la Ley de Seguridad Social implementada en 2009 no toma en cuenta los salarios reales), no se encuentran siquiera en los debates públicos.

⁹ En este sentido las actividades oficialmente aprobadas para realizar por cuenta propia, hasta la fecha, tampoco favorecen la utilización de los elevados niveles de calificación existentes.

El mercado monetario-cambiario-financiero, aún sumido en el complejo entramado de la base bimonetaria imperante, deberá desempeñar un papel mucho más activo, dada la expansión en curso de las relaciones mercantiles en la economía nacional. Las entidades financieras del Estado deben atemperar su desempeño a las nuevas circunstancias, ampliando y flexibilizando las posibilidades de acceso a créditos y atendiendo en general las necesidades de financiación de los emprendimientos no estatales. De lo contrario tomará fuerza un sector financiero privado ya existente, cuyo proceso de acumulación se encuentra fuera de toda posibilidad de control debido al carácter extra-legal de su hábitat.¹⁰ Tómese en cuenta, además, que cada vez existen mejores condiciones para su conexión con financiamientos privados externos, incluso aquellos con objetivos explícitos de subvertir el orden político nacional.¹¹

La oferta estatal en este mercado debe establecer una estructura coherente de tasas de interés a corto plazo, que permita aproximarse sobre bases más objetivas al costo real del dinero en la operatoria de la economía interna. La puesta en marcha de un mercado interbancario constituye un paso relevante en este objetivo (Pérez, 2011). La tan necesaria devaluación de la tasa de cambio oficial del peso respecto al CUC, así como la integración de ambos circuitos monetarios en los segmentos de la población y de las empresas constituye punto de partida para el reordenamiento monetario de la economía (Vidal, 2007; Hidalgo, 2008).

Según la variable de «noción de planificación» se debe establecer, en primer lugar, el papel a desempeñar por los mecanismos de regulación conscientes de la producción que implementa la sociedad en

¹⁰ Estimo, a través de muestreos no significativos desde el punto de vista estadístico, que el mercado privado del crédito ha incrementado, sensiblemente, sus niveles de actividad como respuesta a la expansión del trabajo por cuenta propia y funciona con una tasa de interés cercana al 50 %.

¹¹ Recientemente el presidente de Estados Unidos aprobó una medida que autoriza a los ciudadanos norteamericanos a enviar remesas a sus pares cubanos residentes en la Isla. The Brookings Institution realizó un panel en febrero de 2011 donde se confirma la estrategia de flexibilizar el bloqueo en aquellos puntos que pueden ser claves para la expansión del sector privado en Cuba. Por ejemplo, se plantea la necesidad de que la Oficina de Control de Activos Cubanos permita a ciudadanos norteamericanos abrir cuentas bancarias en Cuba con el objetivo de transferir financiamientos a los pequeños empresarios privados, y se argumenta también la necesidad de autorizar exportaciones norteamericanas al sector no estatal de la economía cubana, bajo el eslogan de que «mientras mayor peso tengan las fuentes independientes de ingreso habrá más independencia» (Cfr. Brookings Institution, 2011).

oposición al desenvolvimiento automático del mercado. La intervención directa del Estado en las relaciones económicas habitualmente persigue la regulación de uno u otro aspecto de la reproducción, ordenando, influyendo o suplantando la autorregulación mercantil.

En la historia de todos los intentos de construcción socialista que siguieron el modelo soviético aparece como una regularidad la forma altamente centralizada y a la vez detallada que ha adoptado esta intervención. Otra de sus características ha sido la distribución directa de recursos físicos en función de determinadas metas, en cuyo proceso de consecución ha predominado el uso en gran escala de incentivos políticos y llamamientos patrióticos a la productividad y disciplina del trabajo.¹² Estos métodos, que son necesarios y útiles en las etapas iniciales de la revolución social, urgidas de una industrialización intensiva, se pueden convertir en un obstáculo para el progreso económico subsiguiente cuando se perpetúan más allá de su justificación histórica, dada su falta de flexibilidad. La dificultad comienza –según afirma Oscar Lange en un discurso pronunciado el 19 de noviembre de 1957 en el Instituto de Política y Economía Nacionales de Belgrado– cuando esos métodos de economía de guerra se identifican con la esencia del socialismo y se les trata como inseparables de este.

Esta forma de regulación –que denominaré «regulación directa»– se basa en la reglamentación de los comportamientos de los sujetos económicos, a través de la definición concreta de sus tareas junto a la asignación directa de los recursos para cumplirlas, contenidas en un sistema de directivas centrales llamadas «plan». La regulación directa, por tanto, es lo que ha sido interpretado como planificación en el imaginario, históricamente predominante, dentro y fuera de Cuba. Esta noción, reduccionista y distorsionada del concepto, trae como consecuencias la introducción de rigideces insalvables en condiciones de heterogeneidad de tipos socioeconómicos, la subestimación del papel de los incentivos económicos en el tránsito socialista, la sobrestimación de la capacidad de optimización de los planificadores centrales y el estímulo a la discrecionalidad administrativa por encima de cualquier tipo de racionalidad económica, lo que finalmente conduce a un proceso altamente costoso, incluso para la legitimación de la viabilidad del socialismo.

En cambio, según el propio Lange (1957), debemos entender por planificación todo esfuerzo para someter la acción de las leyes económicas

¹² Sin embargo, estos mecanismos no son formas exclusivas del socialismo, sino más bien atribuibles a una economía de guerra o emergencia. En varios países capitalistas se han empleado métodos análogos en tiempo de guerra.

y el desarrollo económico de la sociedad a la dirección de la voluntad humana, lo cual se puede intentar utilizando también otro tipo de instrumentos, que se identifican en el presente trabajo como instrumentos de «regulación indirecta».

En este conjunto se pueden incluir todas aquellas acciones que buscan crear determinadas condiciones económicas que induzcan a los sujetos a tomar decisiones en una dirección coherente con los objetivos deseados. Con ello las autoridades tienen en sus manos la posibilidad de modificar las circunstancias que enfrentan estos agentes y así influir indirectamente sobre sus comportamientos, a través de las llamadas políticas macroeconómicas, entre otras. La combinación entre mecanismos directos o indirectos de regulación consciente constituye otro de los rasgos distintivos en un modelo.

Como se apuntaba en los párrafos anteriores, para el modelo cubano constituye un error común asociar la planificación con la administración directa de los recursos escasos que operativamente tienen lugar en nuestro sistema económico. Esta lógica sugiere que habrá más planificación mientras más recursos se encuentren sujetos a la regulación directiva central, generalmente propensa a emplear métodos administrativos.¹³ En la actualidad el Plan de la Economía Nacional pretende abarcar de manera directiva casi la totalidad de la actividad económica del país. La elaboración de los planes transita por un mecanismo tergiversado que convierte en un campo de batalla el proceso económico más importante del sistema. En este las autoridades de las empresas y organismos –empleando los más disímiles ardides– compiten por obtener la mayor cantidad posible de recursos de los niveles superiores, amparados en la legitimidad de la defensa de los intereses sociales por los cuales responden. La práctica histórica ha implantado un proceder a través del cual las unidades de base informan capacidades subestimadas y necesidades sobrestimadas, mientras los niveles centrales asignan recursos por debajo de lo solicitado y exigen metas superiores a las planificadas por la base. Los principales argumentos para la discusión provienen básicamente del desempeño durante el año anterior, el cual se exige sea perennemente superado y con un menor empleo de recursos. Cada parte es consciente de la filosofía de la otra, con lo cual el proceso se convierte, en realidad, en un acto de negociación, cuyo resultado final es determinado centralmente de forma administrativa.

¹³ Siguiendo por estos derroteros, se conoce que la Comisión de Planeación del Estado en Polonia llegó a limitar el número de liebres que los cazadores podían cazar durante un año.

Por otra parte, se introducen severas distorsiones con la coexistencia desarticulada –en ocasiones caótica– de formas de medición y gestión económica basadas en magnitudes físicas, con análisis sustentados en magnitudes financieras, cuyo origen se encuentra en el diseño funcional de las instituciones, así como en la idea subyacente en torno al concepto de planificación. Por ejemplo, mientras al Ministerio de Finanzas se le atribuye la soberanía sobre la elaboración, ejecución y control del presupuesto en CUP, se encarga al Ministerio de Economía de los recursos materiales y las divisas, a través de la asignación de los CUC y del manejo discrecional de la capacidad de estos para la compra de divisas externas. Como consecuencia, el funcionamiento físico de la economía presenta inconsistencias con su dimensión financiera, debido al elevado nivel de intervenciones administrativas.¹⁴ La disfuncionalidad que se presenta en la base y el rechazo a los temas relacionados con «el plan y el presupuesto» suceden –entre otras causas– por incoherencias conceptuales como esta, que anulan el carácter científico de la planificación, obstaculizan su verdadera comprensión y, por lo tanto, obstruyen su desarrollo como proceso consciente.

El primero de los Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) (2011) plantea que en el nuevo modelo económico el sistema de planificación socialista seguirá siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, y que debe transformarse en sus aspectos metodológicos, organizativos y de control. Además, debe tener en cuenta la influencia del mercado sobre dicho modelo, así como sus características. Ahora bien, ¿qué implica para el sistema de planificación continuar siendo la vía principal y a la vez transformarse? Conservar la centralidad de la planificación aceptando la presencia creciente de formas descentralizadas implica un profundo cambio tecnológico en la concepción y práctica de la planificación a todos los niveles. Sin embargo, ¿quiénes dominan hoy la tecnología de la planificación? Por lo general las personas dedicadas a la práctica de la planificación a lo largo del país cuentan –como acervo principal– con una experiencia personal de trabajo en esta esfera durante varias décadas; por lo tanto, respecto a los métodos y concepciones actualmente empleados, estos especialistas corren el riesgo de padecer el fenómeno de la «familiaridad acrítica», teniendo en cuenta que en los últimos

¹⁴ Esto sin contar el problema general de la determinación de los precios –ya sea la formación de los precios para el sector centralizado o la regulación indirecta de los precios del sector descentralizado–, lo que constituye uno de los más graves problemas de la conducción de la economía cubana actual, y que aún no recibe toda la atención que requiere ni siquiera en los medios académicos.

veinte años no ha existido en Cuba un desarrollo, desde la academia, de la investigación sobre esta temática.¹⁵

En la práctica actual, como interpretación de la exhortación por la máxima dirección del país al incremento de la efectividad de la planificación, lo que está ocurriendo es una expansión insostenible del balance físico de productos dentro de la dinámica de elaboración del «plan».¹⁶ Esto constituye una severa inconsistencia, dado el carácter financiero de la inserción externa de la economía cubana –y no material como en el otrora Consejo de Ayuda Mutua Económica de las décadas del setenta y el ochenta– así como la precariedad de los dispositivos de planificación en todas las entidades e instituciones a lo largo del país. Los métodos de la administración o disposición de recursos para una economía de guerra, exitosamente desarrollados en el campo de las actividades militares, pueden resultar completamente contraproducentes si se les pretende aplicar a la totalidad de la economía de un país, la cual responde a determinadas regularidades económicas inobjectables.

Debido a lo anterior, uno de los principales retos que debe enfrentar el nuevo modelo de funcionamiento económico cubano –o mejor dicho, el nuevo socialismo cubano– radica en el desarrollo de unas sólidas bases científicas para la planificación.

Bajo las condiciones actuales y previsibles de la economía cubana, deberían realizarse algunas transformaciones en la forma de regular los procesos productivos. En primer lugar, tendría que imponerse, resueltamente, una planificación de tipo financiero. Los balances materiales deben reducirse solamente a aquellos renglones limitados desde el punto de vista de la oferta física, e incorporarse a la ecuación

¹⁵ Son contados los autores cubanos con alguna producción científica sobre planificación, posterior a la década del noventa. En este sentido, además de las propias aportaciones de algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), se han realizado esfuerzos desde el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y el Centro de Estudios de Economía y Planificación, ambos adscriptos a este ministerio. En los planes de estudio de las carreras de Economía en las universidades cubanas, la disciplina de Planificación estuvo virtualmente ausente durante las dos décadas precedentes. Solo recientemente, en el año 2008, se creó, en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, un Departamento Docente de Planificación con el fin de recuperar y desarrollar creativamente estos contenidos.

¹⁶ Por ejemplo, para una unidad presupuestada como la Universidad de La Habana, el proceso de elaboración del Plan 2012 exigió demandar al Ministerio de Economía y Planificación, sin contar materiales de construcción para las inversiones, las cantidades físicas exactas de más de 500 renglones, so pena de no disponer el próximo año de los recursos que no se demandaran.

global como restricciones de capacidad.¹⁷ Luego, el marco regulatorio tiene que garantizar que los resultados financieros de las entidades se correspondan con los resultados del sector real.¹⁸

Por otro lado, el incremento de la autonomía empresarial es esencialmente contradictorio con el predominio de la regulación a través de directivas verticales. Aspectos de este tipo, entre otros, hicieron fracasar los intentos descentralizadores de finales de la década del setenta, limitaron el desempeño de las cooperativas agrícolas impulsadas en los noventa y truncaron las potencialidades del perfeccionamiento empresarial. Se impone, entonces, el fortalecimiento del papel de los incentivos en las tareas económicas, y la sustitución de la discrecionalidad administrativa por un sistema estable de reglas que responda a principios económicos. En lo adelante, tanto las actividades que se despliegan con fuerza desde formas no estatales, como el empresariado estatal que se desempeñe con mayores facultades, solo podrán ser conducidos a partir de un mayor uso de la regulación indirecta a través de políticas macro y microeconómicas.

Otro gran reto está asociado a la necesidad de una nueva organización institucional con capacidad real de responder a las nuevas circunstancias y objetivos. En coherencia con la noción de una planificación más abarcadora y con alcance social, deberían replantearse las funciones oficiales del Ministerio de Economía y Planificación, y dejarle solamente aquellas relacionadas con la administración operativa de los recursos.¹⁹ Por otro lado, podría crearse una institución que se ocupe del diseño de la sociedad a largo plazo, de velar por la coherencia de las políticas dictadas desde los diferentes ministerios en relación con los objetivos definidos, al involucrar orgánica y sistemáticamente el concurso de los mejores especialistas, investigadores y académicos

¹⁷ Por ejemplo, si las restricciones para la oferta de energía eléctrica vienen dadas por la elevación de los precios del combustible y no por la capacidad de generación instalada, entonces su proceso de asignación debería limitarse a través de indicadores financieros y no materiales. Si a una entidad en lugar de asignarle de forma subsidiada una cantidad límite de kilowatts a consumir, se le asigna un monto en CUC y se le cobra la electricidad a un precio que incluya los costos reales del país, entonces se podría producir tanta electricidad como estuvieran dispuestas a pagar las entidades a cambio de la reducción de otro tipo de erogaciones.

¹⁸ Para evitar repetir los errores del periodo 1975-1985, durante la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, se debe lograr, por ejemplo, que una empresa constructora perciba ingresos solamente una vez entregada la obra concluida y que todos sus gastos de operación –incluidos los salarios– los cubra con capital de trabajo o con crédito bancario.

¹⁹ Es la función fundamental que realiza en la práctica.

de todas las ciencias que impactan sobre la sociedad.²⁰ El propósito fundamental es crear un órgano multidisciplinario capaz de proponer un enfoque integrador de la planificación, que trascienda el estrecho marco de la economía y la asuma como vía para la conducción de la sociedad en su conjunto. Esta institución pudiera subordinarse a la Asamblea Nacional, adoptando un rango similar al de la Contraloría General de la República.²¹

La supervivencia del camino socialista descansa, entre otras bases, sobre la posibilidad de hacer corresponder, de manera sostenible, la producción de la riqueza social con la noción de necesidades de sus individuos. En este sentido, la expansión de la riqueza creada debe acompañarse de la promoción de expectativas de consumo socialmente responsables, acordes con una racionalidad diferente a la del consumismo sistémico del capitalismo. Ahora bien, ¿de qué forma es distribuida a cada individuo esta riqueza resultante de la creación colectiva? En cuanto a Cuba se refiere, el modelo consolidado durante los años ochenta se encontraba sostenido por un ideal de igualación artificial. En 1985 se estimó que solo un 49 % del consumo total de bienes y servicios se obtenía como resultado del trabajo, mientras el 51 % restante era atribuible a subsidios y gratuidades contenidos en los fondos sociales de consumo.²²

En las condiciones actuales, aunque los cálculos sobre las fuentes del consumo final resultan complejos, no es difícil percibir que el trabajo continúa siendo relegado. La alta ponderación de las vías colectivas de consumo –con tendencia igualitarista– que caracterizó la política social desde las primeras décadas y se profundizó con los esfuerzos por distribuir los impactos de la crisis durante la década de los noventa, así como en las políticas impulsadas con posterioridad al año 2000. A ello se agrega la proliferación, a partir de estos años, de diversas fuentes de acceso a bienes y servicios no relacionadas con la trascendencia social del trabajo aportado. Estos dos elementos, combinados con el escaso poder de compra del salario estatal, constituyen, posiblemente, el principal

²⁰ En experiencias internacionales, como Sudáfrica o Vietnam, este tipo de instituciones han sido diseñadas bajo el nombre de Comisión Nacional de Planificación.

²¹ La llamada Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social, acordada por el VI Congreso del PCC, pudiera adoptar en el futuro esta institucionalidad y funciones.

²² Los ingresos no asociados al trabajo ni a los fondos sociales de consumo se pueden considerar insignificantes en este periodo. La apropiación de trabajo ajeno estaba prácticamente suprimida, la presencia de actividades bajo formas privadas de propiedad era sumamente escasa.

perjuicio a la legitimidad del socialismo en Cuba, y se yerguen en causas esenciales de los actuales —e históricos— bajos niveles de «intensidad del trabajo».²³ Valórese que en el año 2009 solo el 49 % de los ingresos monetarios de la población provenían del trabajo en entidades estatales, a pesar de que cerca del 84 % de la población empleada trabajaba para este sector.

El nuevo modelo tiene que ofrecer a los individuos alternativas para crear sus proyectos de vida en consistencia con los objetivos de la construcción socialista. Durante las décadas de 1970 y 1980, las aspiraciones de vida de los jóvenes eran claramente realizables en los marcos de la aspiración colectiva, pues las reglas implícitas de movilidad social tributaban claramente a los objetivos del proyecto de nueva sociedad. Sin embargo, a partir de la crisis cubana de fin de siglo, el impactado proyecto social resurge con una capacidad muy lacerada para ofrecer oportunidades de inserción y prosperidad individual a partir de lo aportado laboralmente, con lo cual cuestiona —incluso— las posibilidades de solventar necesidades vitales en los marcos de la legalidad. Se generaron, entonces, señales perversas que conducen a la aceptación a nivel social de valores inconsistentes con los paradigmas emancipatorios históricamente defendidos por el socialismo.

Las opciones reales para la solución de necesidades perentorias quedaron reducidas a unas pocas alternativas. Una de ellas es la ubicación en puestos claves de instituciones o empresas con potencialidades para el acceso a recursos extrasalariales, incluyendo los bienes o servicios que forman parte de esquemas de distribución oficialmente institucionalizados, identificables bajo la categoría de privilegios o prebendas. Las posibilidades de transporte individual y en muchos casos de vivienda resultan algunos de los incentivos más destacables, aunque estos en realidad constituyen privilegios solo en términos relativos, pues son bienes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, pero no son accesibles a través del salario.

Lo anterior no significa que todas las personas que ascienden a través de este tipo de puestos estén motivadas por intereses de realización personal. La disposición al sacrificio por el bienestar colectivo —simbolizado en el paradigma guevariano— forma parte de los valores fomentados durante varias décadas de Revolución, y aún determina el

²³ Se subraya el término intensidad del trabajo para diferenciarlo del concepto de productividad, el cual depende también de elementos como la innovación tecnológica, la relación capital-trabajo, entre otros no atribuibles directamente a la actitud del trabajador.

actuar de muchos funcionarios, dirigentes y trabajadores en general. Sin embargo, el intento de compensar las limitaciones del mecanismo de distribución utilizando «formas administrativas discrecionales» amenaza con anular el carácter transformador de algunos funcionarios, así como su sistema decisorio puede permearse por un instinto de conservación que tiende a evolucionar sobre ribetes clasistas, aún de manera inconsciente.

Mención aparte merece el florecimiento, desde determinados puestos laborales, de fenómenos altamente lacerantes como la apropiación ilícita de recursos, el tráfico de influencias y la aparentemente idiosincrásica acumulación de capital relacional como garantía a largo plazo. Algunos de estos puestos –en sectores como la gastronomía, el turismo, la distribución de combustible, las direcciones de vivienda, la esfera comercial, entre otros– incluso llegan a cotizarse a grandes montos en mercados subrepticios, dado su elevado potencial retributivo. He aquí, posiblemente, la principal forma de explotación del trabajo ajeno existente en la actualidad, así como la principal amenaza a la supervivencia de los valores sistémicos.

Las restantes vías con alguna capacidad de ofrecer posibilidades de prosperidad individual radican en el desempeño de actividades económicas privadas, independientemente de su estatus de legalidad, y en la emigración económica, ausente en las discusiones oficiales en torno al VI Congreso del PCC.²⁴

Evidentemente, lo anterior debería estar en el punto de mira de la política económica. El aspecto neurálgico en esta realidad lo conforman las condiciones extremas de no realización de la propiedad social que vienen imponiéndose en Cuba. Ante ellas el trabajador estatal, más allá de no sentirse propietario de los medios de producción, comienza a identificar antagonismos con el Estado como su empleador, e incluso puede asumir su relación con él como un conflicto de clases, dada la herencia cultural del sistema capitalista precedente, las influencias del entorno internacional también capitalista, como consecuencia de los propios errores internos en la construcción de la nueva sociedad.

Por todo lo anterior, el reordenamiento de las fuentes de distribución constituye un aspecto estratégico para la persistencia sistémica del socialismo. Los ingresos reales personales, provenientes del trabajo, deben alcanzar magnitudes congruentes con los requerimientos de

²⁴ No obstante, recientemente el presidente Raúl Castro anunció una revisión de la política migratoria, al clausurar el VII Período de Sesiones de la Asamblea Nacional, el 1.º de agosto de 2011 (Castro, 2011a).

estimulación para la llamada productividad, lo que significa garantizar las condiciones básicas de reproducción de la fuerza de trabajo y satisfacer las expectativas del modo de vida al que aspira la sociedad

En estos momentos, el primer problema que enfrenta la implementación del nuevo modelo de funcionamiento propuesto es la imposibilidad de garantizar la medición certera de los hechos económicos. Aspectos como las inconsistencias derivadas de la dualidad cambiaria, la regulación material sobre determinados recursos al margen de su costo económico, además del empleo de mecanismos administrativos que exacerban fenómenos como la «cuasifiscalidad», impiden la realización de un análisis económico riguroso en cualquier organización empresarial o presupuestada y por lo tanto también a escala global.²⁵

Un segundo aspecto está relacionado con la necesidad de establecer cuáles deben ser los indicadores adecuados para evaluar el desempeño del conjunto de la economía en su evolución hacia los objetivos de un desarrollo socialista. En este sentido surge la siguiente interrogante: ¿se puede medir el éxito –incluso el económico– del proyecto de desarrollo socialista cubano en términos de producto interno bruto? El debate acerca de los indicadores debe hallar su espacio en la amplia discusión actual. Resulta imprescindible avanzar hacia la construcción y utilización de estadísticas que permitan evaluar tres dimensiones fundamentales:

- a. la mejora real percibida por la población en su calidad de vida;
- b. la evolución de la capacidad adquisitiva del trabajo como principio sistémico esencial; y
- c. los indicadores de crecimiento de la productividad, como medida del avance en la transformación estructural requerida para la superación del subdesarrollo.

En el contexto de la convocatoria a la «actualización», se ha construido un vigoroso consenso sobre la necesidad de cambiar. Sin embargo, las posibilidades reales de implementar transformaciones descansan sobre un conjunto de factores que trascienden la voluntad de cambio de la dirección política del país. Las reminiscencias de los últimos cincuenta años de modelo centralizado *cuasi* estacionario –últimamente al margen de muchas de las leyes reales de movimiento de la sociedad– y la

²⁵ Entendiendo por «cuasifiscalidad» aquellos ingresos potenciales no captados y/o las erogaciones en los que incurre un gobierno, que por su naturaleza no son capturados en la contabilidad y análisis del presupuesto público.

intención manifiesta de modificarlo sustanciosamente configuran una compleja dinámica de construcción-destrucción de conceptos, que requerirá varios años de coexistencias y, a la vez, de inconsistencias y conflictos naturales.

La implantación del nuevo modelo deberá lidiar con la amenaza que representa, como única alternativa de alineación, el contrapunteo actual en el binomio dogmatismo/pragmatismo. En oposición a la intransigencia dogmática establecida como herencia cultural del modelo «único» soviético, se corre el riesgo de transitar al peligroso trazado del pragmatismo economicista, con capacidad para hacer zozobrar la nave en ausencia de un profundo debate más esencial acerca de qué deben entender por socialismo los cubanos de 2011.²⁶ La definición de estos rasgos debe caracterizar nuestra sociedad en un tiempo generacionalmente factible, que permita avanzar en la reducción de las brechas, en un contexto de una mayor coherencia entre las políticas económicas, sociales, ambientales, culturales y educativas, entre otras tantas imprescindibles, en una concepción integradora de la dirección científica del desarrollo socialista.

Para concluir, el éxito de las ideas al ruedo estará en función de la objetividad y precisión de la secuencia o ruta crítica que se establezca para la implementación; del contenido realmente científico en la argumentación de las decisiones y de la insustituible responsabilidad de las ciencias sociales; de la preparación en temas económicos de la estructura de dirección estatal y su disposición real a cambiar el *statu quo*; así como de la estabilidad de las relaciones económicas externas en medio de crecientes esfuerzos y oportunidades por subvertir el orden sistémico doméstico.

La principal lección del desenlace de los procesos de reforma esteuropeos es la necesidad de no perder control político sobre la dinámica de los cambios, para impedir que las fuerzas reaccionarias accedan a las bases del poder. Sin embargo, el poder político también se pone en riesgo si el sistema político no evoluciona.

Bibliografía

BROOKINGS INSTITUTION (2011): «U.S.-Cuba relations: moving policy forward in 2011 and beyond», Brookings Institution, Washington D.C., 15 de febrero.

²⁶ Al respecto el presidente Raúl Castro (2011) anunció recientemente que la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos tendrá bajo su cargo «elaborar la conceptualización teórica integral de la economía socialista cubana».

- BRUS, W. (1969): *El funcionamiento de la economía socialista. Problemas generales*, OIKOS Ediciones, Barcelona.
- CASTRO, R. (2011): «Discurso de clausura del Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional», *Granma*, 2 de agosto.
- «Constitución de la República de Cuba» (2003), en *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, edición extraordinaria, n.º 3, Editora Política, La Habana.
- GONZÁLEZ, A. (1995): «Modelos económicos socialistas. Escenarios para Cuba en los noventa», *Cuba: Investigación Económica*, n.º 3, julio-septiembre, p. 2.
- HIDALGO, V. (2008): «De la dolarización a la unificación monetaria en Cuba», *Economía y Desarrollo*, n.º 1, pp. 133-164.
- LANGE, O. (1957): *Papel de la planeación en la economía socialista*, Instituto de Política y Economía Nacionales de Belgrado.
- MARCELO, L.; A. GARCÍA y O. ECHEVARRÍA (2005): *Reflexiones sobre la empresa estatal cubana*, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, La Habana.
- ONE (2011): *Anuario Estadístico de Cuba 2010*, La Habana, <<http://www.one.cu>>.
- PCC (1975): «Informe Central al Primer Congreso», en *Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, Memorias*, Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC, La Habana.
- _____ (2011): *Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*, VI Congreso del PCC, La Habana, 18 de abril.
- PÉREZ, C. (2011): «Esquema de política monetaria para el segmento de la población de la economía cubana», Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas, Facultad de Economía, Universidad de La Habana.
- VIDAL, P. (2007): «Nuevo esquema de la política monetaria en Cuba: análisis macroeconómico y estimación con un modelo Var», Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas, Facultad de Economía, Universidad de La Habana.